



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-009-2016-00013-02 (O2-24-054)
Demandante: CARLOS EDUARDO GRISALES BURGOS
Demandadas: MUNICIPIO DE MEDELLÍN, EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU, JIRO S.A. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A.
Procedencia: JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En Medellín, a los veintidós (22) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por CARLOS EDUARDO GRISALES BURGOS en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU, JIRO S.A. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A., donde también se vinculó como llamada en garantía a la sociedad COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-009-2016-00013-03 (O2-24-054), a fin de resolver el recurso de apelación impetrado por CARLOS EDUARDO GRISALES BURGOS en contra de la decisión adoptada el 13 de febrero de 2024, y mediante la cual la juzgadora de instancia aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho.

1. ANTECEDENTES

El señor CARLOS EDUARDO GRISALES BURGOS actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral, en procura de que se declare la existencia de una única relación de trabajo con la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA, en lo sucesivo, ESU, desde el 05 de julio de 2005 y hasta el 30 de diciembre de 2013; reclamando en consecuencia el reajuste de los salarios causados a partir del 1° de mayo de 2011, el reconocimiento de las primas de vacaciones, primas de navidad y bonificación

por servicios prestados, junto con la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria por el no pago de las acreencias laborales, así como el reajuste del auxilio de cesantías, intereses a las cesantías y las vacaciones; controversia que se dirimió en primera instancia por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín el 07 de diciembre de 2020 (docs.01 a 03, subcarp.03, carp.01), el que declaró que “...entre el señor CARLOS EDUARDO GRISALES BURGOS y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA existieron los siguientes contratos de trabajo realidad: entre el 5 de julio del 2005 y el 23 de julio del 2008; entre el 28 de agosto y el 31 de diciembre de 2008, entre el 1° de febrero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009; entre el 26 de enero de 2010 y el 30 de marzo de 2012; el 1° de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012, del 8 de mayo al 26 de junio de 2013; del 16 de julio al 11 de octubre de 2013 y del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2013”, infligiendo las condenas relacionadas en el numeral segundo del *decisum* y con la que se condenó en costas a la ESU y al MUNICIPIO DE MEDELLÍN a suma equivalente a \$ 3.905.854.

La sentencia de primer nivel fue modificada por este juez de apelaciones en providencia del 28-jul-2023 (doc.24, carp.02), para recalcular el monto de las prestaciones sociales reconocidas y la cuantía de la indemnización por despido sin justa causa, al paso que, se dispensó la indemnización moratoria del artículo 1 del Decreto 747 de 1949, en la suma de \$ 43.560 diarios, desde el 1 de abril de 2014, hasta la fecha en que se efectúe el pago total de las condenas impuestas.

1.1. Trámite de Primera Instancia

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, en fecha 13 de febrero de 2024 (doc.11, carp.01) emitió auto de cúmplase lo dispuesto por esta corporación, y dispuso que por la secretaría del despacho se liquidaran las costas del proceso, las que liquidó en cuantía de \$ 17.577.472, por concepto de agencias en derecho, discriminadas de la siguiente manera: a cargo de la ESU y del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, de forma proporcional, y a favor del señor CARLOS EDUARDO GRISALES BURGOS, la suma de \$ 17.577.472 por la primera instancia únicamente, toda vez que en sede de segundo grado no se impuso condena en tal sentido; liquidación sobre la que se impartió aprobación en la misma fecha.

1.2. Recurso de Apelación

Inconforme con la decisión antes descrita, el apoderado judicial del nodo activo (doc.13, carp.01), interpuso recurso de apelación, en solicitud de modificar el valor de las costas

tasadas en primera instancia, como quiera que, a su juicio, las costas deben ser igual a \$ 46.067.230,935, equivalente al 25% del valor de las acreencias sociales y demás indemnización reconocidas. Añade que, *“...la gestión realizada por el suscrito en el transcurso del proceso que ha durado más de 10 años ha sido amplia, toda vez que asistí a todas las audiencias de trámite, interrogué a los testigos, aporté todas las pruebas tendientes y necesarias para lograr la prosperidad de las pretensiones, se presentaron alegaciones en segunda instancia, no dejé vencer ningún término (...).”*

1.3. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación fue admitido por esta corporación el 04 de marzo hogaño (doc.02, carp.02), y se corrió traslado a las partes en el mismo proveído para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso; siendo que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU indicó que *“no es dable aplicar el 25% de la condena en la liquidación de las costas y agencias en derecho, ya que la misma no se encuentra justificada en el desarrollo del proceso judicial, y adicionalmente, el valor fijado en el auto del 13 de febrero del 2024 en discrecionalidad del juez de primera instancia responde objetivamente a la finalidad que el Código General del Proceso ha dado a las costas y agencias en derecho y respetando el acuerdo 1887 del 2003”*; en tanto, los demás contendientes guardaron silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El punto sustantivo de debate en la presente Litis se contrae a determinar si la liquidación de las agencias en derecho causadas en el trámite de la primera instancia del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por CARLOS EDUARDO GRISALES BURGOS en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU, JIRO S.A. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A., se ajusta a la normativa que regula la materia.

2.2. Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión de primer grado, con el argumento central de que la tasación de las agencias en derecho, se ajusta a los parámetros fijados por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 1887 de 2003, y el monto es equitativo, razonable, prudente y proporcional, respecto de la naturaleza, calidad y la duración de la gestión desplegada.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia nacional esta Corporación reliva que las costas, esto es, la erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial, está conformada por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, descritos genéricamente en el numeral 3° del artículo 366 CGP como todos los demás gastos hechos por la parte beneficiada con la condena. Por otra parte, las agencias en derecho tienen por finalidad la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aunque pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho (CC sentencia C-089 de 2002).

De conformidad con lo indicado en el artículo 365 del CGP, las costas procesales, comprensiva de las expensas y las agencias en derecho, se imponen a cargo de la parte vencida, a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, y a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza.

Las costas son objeto de liquidación por el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, aplicando las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura para la fijación de las agencias en derecho y teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión profesional desplegada, así como la cuantía de las condenas, sin exceder el tope máximo de dichas tarifas, como se previno en el artículo 366 CGP.

Para los anteriores efectos el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la emisión del **Acuerdo 1887 de 2003**, modificado por el **Acuerdo 2222 de ese mismo año**, aplicable

al caso objeto de análisis, y en relación con el asunto que nos ocupa fijó las siguientes tarifas de agencias en derecho para el área laboral:

2.1. PROCESO ORDINARIO

2.1.1. A favor del trabajador:

Única instancia. *Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

Primera instancia. Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. *En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

Segunda instancia. Hasta el cinco por cinco (5%) del valor de las pretensiones confirmadas o revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto. *En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

PARÁGRAFO. *Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-*

Adicionalmente, conviene resaltar que de conformidad con lo indicado en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, la condena en costas no procede por un obrar temerario, de mala fe, o doloso de la parte condenada, sino que es el resultado de ser vencida en el proceso, es decir, su imposición se hace de forma objetiva atendiendo la prosperidad de las pretensiones y/o las excepciones; en tanto que su liquidación, por el contrario, corresponde a criterios ponderativos relacionados con la naturaleza, calidad, duración de la gestión ejecutada por el mandatario judicial, la cuantía de las pretensiones, y demás circunstancias relevantes, dentro de un concepto claro de razonabilidad y proporcionalidad.

Es meritorio entonces apuntar que las normas señaladas establecen criterios de carácter cualitativo y cuantitativo para que el juzgador fije tales agencias, sin que se pueda imponer de manera automática el valor de dicha importe, pues simplemente orientan al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional con el valor de la condena o la absolución impartida, justipreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta los límites máximo

y mínimo fijados por la ley, pero sin que ello signifique que el fallador esté sujeto a fijar como agencias el máximo referenciado.

En síntesis y de acuerdo con lo delineado por la Corte Suprema de Justicia en decisión STC3869 de 2020, la fijación de las agencias en derecho debe seguir los lineamientos que a continuación se enuncian: “... (i) *deben motivarse y determinarse en la respectiva actuación que las genere; (ii) una vez en firme, el secretario del despacho de única o primera instancia, las incluirá en la liquidación de las costas; y de ese trabajo, (iii) el juez o magistrado hará un control de legalidad mediante auto susceptible de reposición y de apelación según corresponda, con el fin de verificar si las aprueba, modifica o dispone su reliquidación*”.

Revisado el expediente, la Sala advierte que en el numeral sexto de la sentencia de primera instancia proferida el 10 de septiembre de 2020 se establece que las costas se encuentran a cargo de la ESU y solidariamente en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, fijándose como agencias en derecho la suma total y única de **\$ 3.905.854** (doc.03, carp.01; minuto 02:37:46 a 02:38:08, doc.07, carp.01) ; a la par que, en la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de julio de 2023 por esta Corporación, se dispuso dejar incólume la condena en costas dispensada por el cognoscente de primer nivel.

Así las cosas, de lo que viene de decirse, para la Sala refulge palmar el protuberante error en que incurrió el juzgado de instancia en el auto del 13 de febrero de 2024 (doc.11, carp.01), por abierta infracción de los artículos 361, 365 y 366 del CGP al apartarse injustificadamente del valor de las agencias en derecho que había cuantificado en época pretérita, para fijarlo en la suma de \$ 17.577.472; **empero, lo enunciado no significa que deba variarse el monto antedicho o prohibirse el valor de \$ 46.067.230,935 reclamado por el opugnante, en tanto, se trasluce para la Sala la irrazonabilidad de este último valor, al no responder a la regla que establece el canon 3 del Acuerdo 1887 de 2003, misma que explica la relación inversamente proporcional entre la especificación de los puntos porcentuales por aplicar y el valor de las condenas que finalmente se abrieron paso**, así:

“ARTÍCULO TERCERO.- Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

En tal dirección, fijar las agencias en derecho en la suma de \$ 46.067.230,935 según la tesis propuesta por el promotor, sería tanto como desconocer de manera frontal los diáfanos mandatos que dimanarían del tenor de las disposiciones legales antes citadas.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que, a pesar de la imprecisión en que incurrió la juzgadora unipersonal al modificar lo resuelto en derredor al valor de las agencias en derecho para la primera instancia, el monto rebatido en la opugnación, esto es, la suma de \$ 17.577.472 a cargo de la ESU y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, corresponde a un ejercicio ponderativo equitativo, razonable, prudente y proporcional, a juzgar por la naturaleza, calidad y la duración útil de la gestión desplegada, a sabiendas de que el límite máximo autorizado corresponde al 25% del valor de las pretensiones dispensadas a la fecha de la sentencia de primer grado [\$ 134.349.163,74], la naturaleza diversa de las aspiraciones del deprecante, la complejidad del asunto y el tiempo significativo que tomó el sentenciador para resolver el asunto [1.702 días, equivalente a 4 años, 8 meses y 22 días]¹.

Ello así, no deviene en equivocada la decisión de la a quo, en tanto cumpliendo las directrices explicadas en el punto anterior, fijó las agencias en derecho en $\pm 13\%$ de las condenas que se abrieron paso, liquidadas a la data en que se profirió la sentencia de primera instancia y conforme la liquidación que se aneja a esta providencia.

En tales circunstancias, se dispondrá por la Sala la confirmación del proveído de primer grado, en tanto aprobó el valor de las costas de la primera instancia de manera proporcional y a cargo de la ESU y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN en la suma de \$ 17.577.472, a favor del señor CARLOS EDUARDO GRISALES BURGOS.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 365 del CGP**, no se impondrán costas procesales en esta instancia, por no haberse causado, en la medida de su no comprobación.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Cuarta de Decisión Laboral,

4. RESUELVE

¹ Nótese que la demanda se presentó el 18-dic-2015 y el a quo dictó sentencia el 10-sep-2020.


PRIMERO: CONFIRMAR la liquidación de costas aprobada el 13 de febrero de 2024 por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por CARLOS EDUARDO GRISALES BURGOS en contra del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA – ESU, JIRO S.A. y MISIÓN EMPRESARIAL S.A., pero por las razones esbozadas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

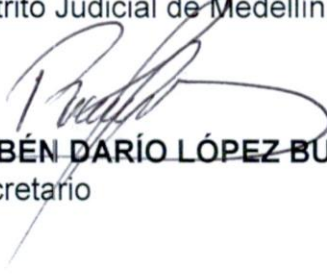

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



LIQUIDACIÓN A LA FECHA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ACREENCIAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DISPENSADAS A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS EDUARDO GRISALES BURGOS		
CONCEPTOS	VALOR	OBSERVACIONES
Reajuste salarios	\$ 5.289.300,19	NA
Diferencias auxilio de cesantías	\$ 455.849,19	NA
Diferencias intereses a las cesantías	\$ 13.020,11	NA
Diferencias vacaciones	\$ 223.776,00	NA
Diferencias primas de navidad	\$ 567.623,25	NA
Diferencias prima de vacaciones	\$ 647.955,00	NA
Indemnización por despido sin justa causa	\$ 22.346.280,00	NA
Indemnización moratoria artículo 1º del Decreto 747 de 1949 (2406 días)	\$ 104.805.360,00	A partir del 01-abr-2014 y hasta el 07-dic-2020 fecha de la sentencia de primera instancia, a razón de \$ 43.560 diarios.
TOTAL CONDENAS	\$ 134.349.163,74	NA
AGENCIAS EN DERECHO PRIMERA INSTANCIA	\$ 17.577.472	[(\$ 134.349.163,74 * ± 13%) = [\$ 17.577.472]